

Distr.
LIMITADA

TD/B/39(1)/SC.I/L.1/Add.3
12 de octubre de 1992

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
39º período de sesiones
Primera parte
Ginebra, 28 de septiembre de 1992
Comité I del período de sesiones

PROYECTO DE INFORME DEL COMITÉ I DEL PERÍODO DE SESIONES

Relator: Sr. E. M. MANAKINE (Federación de Rusia)

INDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
II. CAMINOS AL DESARROLLO: EL FUNCIONAMIENTO, LOS PROBLEMAS Y LA REFORMA DE LA EMPRESA PÚBLICA (tema 4 del programa)	30 - 48	2

Capítulo II

CAMINOS AL DESARROLLO: EL FUNCIONAMIENTO, LOS PROBLEMAS Y LA REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA

(Tema 4 del programa)

30. Para el examen de este tema el Comité I del período de sesiones tuvo ante sí la documentación siguiente:

"Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1992, incluido el Panorama general: Informe de la secretaría de la UNCTAD" (UNCTAD/TDR/12).

31. El Oficial Encargado de los Programas sobre Recursos para el Desarrollo hizo una declaración introductoria sobre este tema en la que se refirió a las cuestiones examinadas en el capítulo 2, que trataba de la reforma de las empresas públicas, de la parte III del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1992.

32. El representante del Brasil dijo que la reforma de las empresas públicas debía ser estudiada con mucha atención por los países en desarrollo, en vista de las reformas estructurales que éstos llevaban a cabo. En la mayoría de los países, las reformas no eran una simple cuestión de ajuste, sino más bien un cambio real en el modelo de desarrollo seguido anteriormente. Formaban parte de un proceso que entrañaba la redefinición del papel del Estado.

En consecuencia, paralelamente a las privatizaciones, era de suma importancia ver en qué sectores deberían mantenerse las empresas públicas o sería necesario crearlas. Las consideraciones relacionadas con la situación operacional de las empresas, aunque eran pertinentes, no eran fundamentales: una empresa pública podía resultar rentable en un sector en el cual ya no se considerara necesaria la presencia del Estado y lo mismo podía ocurrir a la inversa. Debían tenerse en cuenta factores tales como la existencia de monopolios naturales o de deseconomías de emplazamiento. También era interesante efectuar un examen sectorial de los efectos de la privatización y la desregulación en los distintos países, y lo mismo se podría decir de los problemas de gestión. En lo tocante a mejorar la gestión de las empresas públicas, los objetivos de estas empresas debieran definirse incluyendo los objetivos de carácter no económico, incluso aunque hubiera fuertes restricciones presupuestarias. Un presupuesto restrictivo no impedía la

realización de objetivos de carácter no económico si los costos se habían definido de forma clara y se reembolsaban rigurosamente. En relación con esto debería examinarse con más detenimiento el sistema de "contratos" adoptado por el Brasil y otros países. Era imprescindible enfocar con una perspectiva a largo plazo la reforma de las empresas públicas, y por supuesto con una perspectiva más larga que la prevista en la mayoría de los programas de ajuste.

33. El representante del Japón señaló que, de conformidad con el Compromiso de Cartagena, la Junta de Comercio y Desarrollo había creado en la segunda parte de su 38º período de sesiones un Grupo Especial de Trabajo sobre Experiencias Comparadas en Materia de Privatización. Esta iniciativa era muy oportuna, ya que muchos países estaban empeñados activamente en la ejecución de programas de privatización como parte de su ajuste estructural. La labor del Grupo Especial de Trabajo también sería muy útil para los países en desarrollo a causa del importante papel que tenían las empresas públicas en sus economías. Las deliberaciones que sobre este tema del programa habría en el período de sesiones en curso podían ser un presagio de la labor productiva que se llevaría a cabo en el Grupo Especial de Trabajo. El análisis hecho en la edición de 1992 del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo ofrecía una excelente base de discusión. Con respecto al capítulo sobre las empresas públicas del Informe, a pesar de la importancia que tenía aprender de la experiencia de otros países, siempre debería tenerse en cuenta la diversidad de situaciones nacionales. Además, insistir, como se hacía en el Informe, en la importancia de la planificación empresarial a largo plazo tanto para las empresas privadas como para las públicas, tenía una gran validez en vista de los costos y el tiempo que exigía el aprendizaje por la experiencia. El Japón estaba dispuesto a compartir su experiencia en materia de privatización con otros países en el Grupo Especial de Trabajo. La privatización de los ferrocarriles nacionales japoneses era un ejemplo que podía tener un gran interés para otros países, y teniendo esto en cuenta se iba a distribuir a las delegaciones interesadas ejemplares de una nota explicativa sobre esa privatización.

34. El representante de Rumania señaló que por lo general la privatización era la solución más adecuada al problema de la baja eficiencia de las empresas públicas. Sin embargo, las recomendaciones que se hacían en el Informe sobre

página 4

la manera de reformar esas empresas serían útiles para los países que llevaban a cabo privatizaciones en gran escala, ya que en esos países muchas empresas iban a seguir en manos del Estado durante bastante tiempo. Rumania había transformado las antiguas empresas estatales que existían en los sectores estratégicos en sociedades públicas autónomas que gozaban de plena autonomía financiera y de gestión y cuyos costos se cubrían enteramente con el producto de las ventas, con excepción solamente de las actividades que eran de interés público. Todas las demás empresas estatales habían sido transformadas en sociedades mercantiles, bien anónimas o de responsabilidad limitada.

A continuación se las había reestructurado y dividido en varias empresas más pequeñas que habían contribuido a incrementar la competencia, a lo que también habían ayudado la liberalización de los precios, el comercio exterior y la legislación sobre inversiones extranjeras. Además se había promulgado una ley para garantizar la competencia leal. Según la Ley de privatizaciones, se estaba procediendo a privatizar el 30% del capital social de las sociedades mercantiles mediante la distribución gratuita de títulos de propiedad a los ciudadanos rumanos que habían alcanzado los 18 años de edad el 31 de diciembre de 1990. El resto del capital social se vendería a compradores a quienes les interesara adquirir participaciones, incluidos extranjeros. Los tenedores de los títulos podrían utilizarlos para adquirir acciones de las sociedades.

35. El portavoz del Grupo Asiático (Pakistán) subrayó la importancia de las empresas públicas en los países en desarrollo, sobre todo en los sectores donde se necesitaba mucha inversión y organización; incluso en los países desarrollados su papel era importante. En el sector manufacturero las empresas públicas aumentaban la productividad nacional, generaban empleo, creaban industrias productoras de productos acabados y proporcionaban al Estado ingresos en forma de impuestos y beneficios. Aunque las subidas de los precios y la escasez de alimentos habían inducido a crear empresas públicas para la fabricación de artículos de consumo, la desregulación exponía estas empresas a la competencia con el sector privado, sector que pasaba a asumir el papel que cumplían aquellas empresas. Las empresas públicas permitían garantizar unos salarios mínimos y hacerse cargo de proyectos en los que existía un riesgo de pérdidas o de menores beneficios. Por ejemplo, quizás fuera necesario que empresas públicas de ferrocarriles y de transporte por

carretera explotaran rutas en las que tenían pérdidas. Por consiguiente, el objetivo no era la rentabilidad, sino la prestación de un servicio público. Aunque fuera fácil transformar una empresa pública que tenía pérdidas en una empresa rentable subiendo los precios, éste no era el objetivo de los poderes públicos. Los problemas de financiación y de capital de explotación en el sector público habían inducido a muchos países a transformar sus empresas públicas en empresas que se autofinanciaban dirigidas por administradores profesionales y no por funcionarios públicos. A causa de la complejidad de los problemas que entrañaba la reforma de las empresas públicas y al no haber ningún programa de reformas hecho a la medida de cada país, debería dejarse que los gobiernos introdujeran los cambios que consideraran necesarios. Conforme había dicho el Presidente del Grupo de los 77, las empresas públicas habían desempeñado en los países en desarrollo un importante papel en el terreno de la inversión. Ciertas empresas habían conocido una mala gestión porque no se les había obligado a rendir cuentas efectivamente de ella; en estos casos, las decisiones sobre las actividades de las empresas debieran dejarse en manos de los que las dirigían, encargándose solamente la administración del Estado de vigilar la producción. Era importante mantener una estrecha relación entre la eficiencia del sector privado y la del sector público.

36. La representante de China elogió el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1992 por su análisis de los problemas de la reforma de las empresas públicas y su examen de las actividades de estas empresas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los ejemplos concretos dados en el Informe habían permitido efectuar una comparación objetiva de los resultados de las empresas públicas y las empresas privadas. En el Informe no se habían olvidado los problemas, pero al mismo tiempo se habían apuntado formas posibles de reformar estas empresas. Las empresas públicas eran importantísimas en muchos países desarrollados y países en desarrollo, con independencia del régimen y la filosofía política de cada país. Su eficiencia seguía siendo uno de los grandes objetivos. Sin embargo, no existía un método único para reformarlas que valiera para todos los países. Los distintos países podían adoptar opciones diferentes, en función

página 6

de la situación de cada uno de ellos. Para terminar, expuso brevemente la situación de las empresas públicas chinas y los progresos hechos para reformarlas.

37. Aunque se alentaba el desarrollo de otras formas de entidades económicas, las empresas públicas eran la espina dorsal de la economía china. A pesar de su aportación en el pasado, era indispensable reformar el sistema de gestión de esas empresas. La Ley de empresas aprobada el 13 de abril de 1988 había ayudado a fomentar la autonomía en el plano de la gestión y el desarrollo, así como la responsabilidad de las propias empresas con respecto a los beneficios y las pérdidas. Ahora bien, como el viejo sistema de gestión no había sido modificado en lo fundamental, las empresas estatales no se habían convertido verdaderamente en fabricantes y gestores independientes ni tampoco podían participar efectivamente en la competencia en el mercado interior y el mercado internacional. Con el fin de promover la transformación del sistema de gestión y estimular la vitalidad del mercado, el Consejo de Estado había promulgado el 30 de junio de 1992 el Reglamento sobre la transformación de los métodos de gestión de las empresas estatales. La promulgación de este Reglamento, cuyas disposiciones abarcaban los principios generales, los derechos de la dirección, la responsabilidad por los beneficios y las pérdidas, la conversión y la liquidación, las relaciones entre las empresas y el Estado y las obligaciones legales, marcaba un hito importante en la reforma económica de las empresas en China, y el Reglamento desempeñaría un importante papel en la revitalización de las empresas estatales.

38. El representante de Chile elogió el capítulo sobre la reforma de las empresas públicas del Informe como un valioso aporte a la discusión. Chile vivía desde hacía algunos años un fuerte proceso de reformas de sus empresas públicas; fundamentalmente, las privatizaciones fueron el camino más utilizado. La experiencia de la mayoría de los países había demostrado que las reformas en sí mismas, en el interior de esas empresas, aun siendo muy importantes, eran insuficientes. El compromiso de transitar hacia una economía de libre mercado conllevaba necesariamente un fortalecimiento del sector privado, inspirado en el criterio de mantener al Estado sólo en aquellos sectores que no eran de interés para el sector privado o en áreas con objetivos estrictamente sociales. Sin embargo, el Gobierno debería resolver

en forma pragmática en qué áreas debería estar o no presente el Estado. La eficiencia no era el único factor que había que tomar en consideración en el momento de decidir si se debía mantener una empresa en el sector público o privatizarla; estas decisiones tenían que tomarse en función de los objetivos superiores del Estado, que incluían los objetivos sociales. Agregó que cuando se analizaban las distintas reformas posibles era importante reconocer que las repercusiones eran muy distintas según los sectores. Tan importante como buscar la eficiencia de la empresa específica eran las consecuencias de la reforma para el desarrollo futuro del sector y para el proceso de inversiones, principalmente del sector privado.

39. El representante de la República Islámica del Irán dijo que el Informe contenía indicaciones útiles acerca del papel estratégico de las empresas públicas en las economías de los países en desarrollo y los países desarrollados. En el Informe también se había prevenido contra la privatización no calculada. Tanto las empresas públicas como las privadas podían servir de medio para promover y desarrollar la economía nacional. Sin embargo, el crecimiento de tales empresas no era en sí un objetivo. La supremacía de un sector sobre otro estaba arraigada en la estructura política de un país y reflejaba sus antecedentes históricos y culturales, así como sus tendencias de desarrollo. El establecimiento de un sistema de mercado no equivalía a la eliminación del papel rector y supervisor del gobierno. La falta de iniciativa, la lentitud en la adopción de decisiones, la expansión excesiva de la burocracia, la falta de atención a la asignación óptima de los recursos, los incrementos en los gastos públicos y los déficit presupuestarios eran algunas de las deficiencias que se atribuían al funcionamiento de las empresas públicas. No obstante, una cuestión importante era saber si las empresas privadas de un país dado estaban preparadas para asumir el papel y las responsabilidades que incumbían a las empresas públicas, o eran capaces de hacerlo, y si, a falta de un sector privado adecuado, las empresas públicas desempeñaban un papel en la realización de determinados objetivos económicos de la sociedad. El sector privado en la República Islámica del Irán había reanudado sus actividades después de que la economía de tiempo de guerra había pasado a un esfuerzo de reconstrucción. Se había reactivado la bolsa y el número de accionistas del sector privado había pasado

página 8

de 8 millones en 1990 a 48 millones en 1991, tendencia que se mantenía. En el comercio interno, el Gobierno había abandonado en gran medida los controles de precios, la imposición de contingentes, las políticas de racionamiento y centralización. Asimismo, se estaban suprimiendo gradualmente las subvenciones (excepto en el caso de los grupos vulnerables de la sociedad), y los mercados se estaban haciendo más competitivos, lo cual brindaba motivos para una óptima asignación de los factores de producción y una reducción de la burocratización. En cada país el sector privado asumía características y un significado distintos. El sector no tenía un solo mecanismo unificado para la adopción de decisiones, y el funcionamiento y la base de la participación podían diferir.

40. El representante de la Federación de Rusia dijo que la búsqueda de un equilibrio óptimo entre los sectores público y privado era un objetivo fundamental de los programas de reforma rusos. La privatización en gran escala era sumamente importante para el proceso de reforma, cuyas principales metas se esperaba lograr al cabo de tres o cuatro años. La base jurídica necesaria y el programa estatal de privatización de las empresas públicas, incluidas las municipales, se habían aprobado en 1992. La población, mediante la distribución de cheques de privatización, participaría en el proceso y constituiría así la base social de la economía de mercado con lo cual la reforma sería irreversible. Había dos tipos principales de privatización masiva -el de las empresas públicas pequeñas que participaban en los sectores del comercio, los servicios y la construcción y el de las grandes empresas públicas industriales. Se preveía privatizar para 1993 el 30% del activo productivo, y para 1994 y 1995, el 50 y el 60% respectivamente. Sin embargo, el sector público seguiría siendo vital y competiría con el sector privado. La sección del Informe relativa a las empresas públicas revestía interés práctico para la reforma del sector público en Rusia. Se debía alentar a la secretaría a que prosiguiera su labor sobre ese tema. Las discusiones sobre las experiencias comparadas en materia de privatización deberían resultar útiles en el Grupo Especial de Trabajo que se había creado para tratar el tema.

41. El representante de Colombia dijo que el capítulo del Informe sobre las empresas públicas era más que pertinente en momentos en que en la mayoría de los países de América Latina, incluida Colombia, se estaban adelantando

programas de privatización. En un mundo en el cual era tan amplio el consenso sobre los beneficios de la economía de mercado, la eficiencia de una empresa tendía a confundirse con sus resultados económicos, mientras que el bienestar de la economía en general podía esconder situaciones de deterioro social. Nada corroboraba que las empresas públicas fueran poco eficientes y su reforma no era sinónimo de privatización. La decisión de privatizar o de mantener y reestructurar las empresas públicas tenía que adoptarse teniendo plenamente en cuenta los objetivos de la empresa, que podían ser ideológicos, estratégicos, sociales, macroeconómicos, etc. Las reformas concretas debían emprenderse teniendo presentes los objetivos de la empresa. En Colombia, la privatización se había venido adelantado desde hacía algunos años con la venta de la participación del Estado en empresas de capital mixto. En algunos casos, como el de los ferrocarriles y los puertos, se había optado por la privatización porque el Estado había reconocido su dificultad para encargarse de la administración y ejercer el control. Ciertos servicios también habían sido privatizados. Algunos bancos estaban siendo reprivatizados tras la intervención del Estado para contrarrestar la especulación y la mala gestión. En el sector de las comunicaciones, se estaba autorizando a las empresas telefónicas privadas a que compitieran con las empresas públicas. Se estaba llevando a cabo un debate sobre las ventajas y desventajas de permitir el establecimiento de cadenas de televisión privadas. El Grupo Especial de Trabajo en materia de privatización podía ser de gran beneficio para tratar todas estas cuestiones.

42. El representante de México dijo que en su país el problema de las empresas públicas que representaban una severa carga para las finanzas gubernamentales se resolvería por la liquidación o la venta a particulares. La crisis económica de la década de 1980 obligó al Gobierno a definir con más precisión las funciones y prioridades de la empresa pública. El Estado se había visto involucrado en demasiadas actividades, perdiendo con ello el sentido de las prioridades. Había disminuido la capacidad de atender las metas, tanto desde el ángulo político como desde el ángulo financiero. Además, la transformación de la sociedad mexicana había modificado sustancialmente las tareas que enfrentaba el Estado. Entre los problemas que debían ser abordados con urgencia figuraban los rezagos sociales y económicos

página 10

en el sector rural, en las comunidades indígenas y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. El crecimiento de la participación del Estado en casi todos los aspectos de la vida social había sido inevitable en un período de reconstrucción y de despegue industrial, pero había perdido su efectividad y el apoyo popular. La privatización no consistía meramente en hacer que las empresas funcionaran más eficientemente, sino que tenía una dimensión política más amplia: autorizar la propiedad del Estado sólo en las esferas de interés nacional estratégico. En consecuencia, el Estado estaba concentrado en lo básico, como la creación de infraestructura social, la promoción del equilibrio regional y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. México había privatizado más de 900 empresas desde 1982 con resultados favorables para la modernización industrial del país y el saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo, los países con características y prioridades diferentes podían preferir otras opciones. Para los que optasen por mantener la propiedad pública resultaba recomendable promover la eficiencia en base a proyectos de reforma de mediano y largo plazo.

43. El representante de Austria celebró que se hubiera consagrado todo un capítulo del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1992 al tema tan polémico de la reforma de las empresas públicas. Sin embargo, para poder situar el problema en la justa perspectiva, estimaba que el Informe debía haber presentado al menos una breve descripción de lo que realmente ocurría en la mayoría de los países. No podía darse por sentado que tantos gobiernos habían emprendido amplios programas de privatización sin razones convincentes. Aunque la UNCTAD VIII había decidido encomendar a un grupo especial de trabajo la cuestión de la privatización, en el Informe se había abordado el tema sólo de pasada. Aunque había límites a la velocidad y la escala de la privatización, nadie debía subestimar sus posibilidades; la experiencia indicaba que la privatización también era posible en condiciones muy desfavorables. Habría sido útil alguna evaluación de los efectos de la privatización. El Banco Mundial había llegado a la conclusión de que en la gran mayoría de los casos habían aumentado la productividad y las inversiones y se había logrado una mayor diversificación gracias a la privatización. Normalmente la decisión de privatizar no se basaría en la ideología sino que sería el resultado de situaciones en que los autores de la política económica

no tendrían más alternativa para la solución de problemas muy difíciles. Desde luego, la privatización no siempre se consideraba conveniente, pero el movimiento en esa dirección había comenzado cuando la carga para la sociedad se volvía desproporcionada en relación con los beneficios derivados de las empresas estatales. Aunque en el Informe se asignaba demasiado espacio a las razones conducentes al establecimiento de empresas públicas, sus características y su nivel de eficiencia, se explicaba de forma bastante convincente la cuestión de la reestructuración en toda su complejidad. El mensaje, tal vez no intencionado, del Informe era que la reforma era un asunto delicadísimo que sólo podía fructificar si se cumplían numerosos requisitos. No sería de sorprender que los gobiernos, después de estudiar el análisis, llegaran a la conclusión de que la privatización ofrecía más posibilidades de éxito que la reforma.

44. El representante de la India destacó que, aunque no existía una norma general para la reforma de las empresas públicas, un requisito previo necesario para reestructurarlas en aras de una mayor eficiencia era concederles autonomía funcional y establecer criterios de eficiencia específicos y cuantificables. La creación de condiciones de mercado competitivas era también fundamental para aumentar su eficiencia. El cambio tecnológico había abierto posibilidades para la creación de mercados incluso en los casos que alguna vez se hubieran considerado monopolios naturales. En general debían evitarse los controles administrativos sobre los precios y la distribución y eliminarse gradualmente las subvenciones indefinidas. Como el proceso de reestructuración repercutiría en las condiciones de empleo, era importante que se establecieran sistemas apropiados de seguridad social para la readaptación de la fuerza de trabajo. Los organismos multilaterales de financiación y los órganos de las Naciones Unidas podían prestar su apoyo financiero y técnico en ese sentido. La reforma de las empresas públicas no suponía la retirada del Estado de todos los sectores económicos. Seguiría necesitándose la participación estatal en la educación, la investigación y el desarrollo y el avance tecnológico, por ejemplo.

45. La portavoz de la Comunidad Económica Europea (Reino Unido) dijo que, al exponer la contribución necesaria y productiva de los sectores públicos y la diversidad de la experiencia histórica, el Informe había presentado una

página 12

perspectiva útil de las cuestiones y un valioso contrapeso a las ideas populares dogmáticas. A las empresas públicas les correspondía un papel importante en un proceso de desarrollo eficaz. Los países en desarrollo podían estudiar con provecho su contribución productiva. Las empresas públicas podían beneficiar a una economía de diversas maneras, por ejemplo, en esferas en que el mercado no podía por sí mismo alcanzar determinados objetivos socioeconómicos, y en la innovación industrial. El efecto estimulador para el resto de la economía de las políticas de adquisición del sector público también podía apoyar el crecimiento de las industrias secundarias. Un sector público próspero desempeñaba una función importante en el desarrollo de una economía, y en el Informe se señalaba que muchas empresas públicas obtenían utilidades, particularmente en los países en desarrollo. Sin embargo, también tenían características menos favorables. En particular, la idea de que el Gobierno protegiera a los monopolios estatales contra la competencia interna debía abordarse con cautela; era difícil conciliar la existencia de monopolios con la atracción de inversiones extranjeras directas, que eran un factor importante para estimular el crecimiento económico. Además, las industrias nacionalizadas eran vulnerables a la intervención política y burocrática así como a las restricciones financieras públicas. El hecho de abrumar a las empresas públicas exigiéndoles que cumplieran demasiados objetivos sociales y comerciales podía ser causa de que no se alcanzara satisfactoriamente ninguno de los objetivos. Las empresas públicas también podían incidir en las oportunidades de mercado de los competidores del sector privado, por ejemplo, marginándolos masivamente del acceso a los recursos financieros. En el Informe se podría haber prestado más atención a esta última cuestión. Para permitir que las empresas públicas contribuyesen más eficazmente al crecimiento, los gobiernos tendrían que establecer objetivos estratégicos e indicadores de eficiencia.

46. El sector privado era el principal medio para generar riqueza en la economía. Los gobiernos debían adoptar políticas que promoviesen la empresa privada estimulando la competencia y el libre mercado, eliminando la reglamentación excesiva y creando un clima de confianza para atraer las inversiones extranjeras y nacionales. La privatización de las industrias públicas y la creación de competencia del sector privado eran la clave para

garantizar la disponibilidad de bienes y servicios al mínimo costo económico. La aplicación generalizada de la privatización en el marco de los programas de ajuste estructural era una medida que había que celebrar. Había que alentar la participación local en la distribución más amplia de la propiedad de la riqueza en la economía, ofreciendo a los ciudadanos una participación directa en el éxito de una industria mediante la propiedad de acciones. Se habían atraído considerables inversiones extranjeras directas, que a su vez habían dado lugar a la transferencia de tecnología y de competencias administrativas. Sin embargo, era importante contar con un mecanismo adecuado de reglamentación y supervisión para eliminar las prácticas no competitivas. La privatización no era la única opción y no debía acometerse en forma aislada del establecimiento de políticas socioeconómicas y de condiciones jurídicas. Podían ser beneficiosas para la economía unas reformas de menor alcance como, por ejemplo, la de privatizar parcialmente los servicios periféricos manteniendo los servicios centrales a cargo del Estado. La privatización del sector público no suponía el abandono de los servicios públicos. El Estado podía crear condiciones favorables para la empresa privada, en particular creando la infraestructura necesaria. Habida cuenta de las dificultades propias del enorme paso hacia la privatización, algunos países podrían preferir un método gradual. Era de esperar que el Grupo Especial de Trabajo examinase la privatización desde el punto de vista de sus ventajas prácticas de gran alcance para los países que consideraban la posibilidad de aplicar esos programas.

47. El representante de Polonia declaró que la reforma de las empresas públicas en Polonia había consistido principalmente en la privatización pues las empresas del sector privado eran más productivas y eficientes. El objetivo principal de la transformación de la propiedad en Polonia suponía un cambio de sistema: la modelación de una economía dominada por el sector privado con el fin de aumentar la eficiencia económica. Se aplicaba un criterio de dos facetas: transformación de la forma de propiedad de las empresas estatales existentes, y creación de nuevas entidades económicas privadas. Con ese fin, las actividades desarrolladas desde 1990 habían abarcado: la reprivatización, la privatización, la modificación de los sistemas de administración de la propiedad pública, y la reconstrucción y el

página 14

desarrollo de la infraestructura financiera e institucional. A la fecha se habían privatizado en total 1.669 empresas -el 21% de todas las empresas estatales. También estaba en marcha un intenso proceso de privatización de pequeñas empresas industriales y de servicios. En consecuencia, crecía rápidamente la participación del sector privado en todos los sectores de la economía.

48. El representante de Indonesia señaló que el tema de las empresas públicas era muy pertinente en relación con los esfuerzos por formular políticas macroeconómicas favorables al crecimiento y al desarrollo. Las empresas estatales eran esenciales en las esferas en que el sector privado no estaba dispuesto a participar o se veía impedido por limitaciones financieras, perspectivas poco alentadoras para las inversiones, etc. Además, había objetivos especiales relacionados con las empresas estatales. Sin embargo, la participación del sector privado debería acrecentarse conforme al ritmo de desarrollo económico. Sería preciso evaluar el papel y el rendimiento de las empresas estatales para garantizar que aportasen una contribución adecuada al desarrollo económico. Simultáneamente, los gobiernos podían crear un clima favorable a una mayor participación del sector privado así como a la reestructuración de las empresas estatales. Un medio macroeconómico más estable y competitivo contribuiría enormemente a la identificación de las empresas que podrían privatizarse. En resumen, se necesitaba la voluntad política de los gobiernos. La privatización no era una simple cuestión de transferencia de propiedad; más bien era cuestión de determinar la mejor manera de mejorar la capacidad administrativa y la eficiencia.
